



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

S/REF: 001-014898

N/REF: R/0284/2017

FECHA: 11 de septiembre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

En respuesta a la Reclamación presentada por [REDACTED], en representación de la Fundación Ciudadana Civio, con entrada el 16 de junio de 2017, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN:**

I. ANTECEDENTES

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, [REDACTED] presentó con fecha 17 de mayo de 2017 solicitud de acceso al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), dirigida al MINISTERIO DEL INTERIOR, con el siguiente contenido:

Estimada secretaria de Estado de Seguridad,

Me gustaría conocer todas las peticiones de reunión recibidas por sus altos cargos desde el inicio de la presente legislatura, con indicación del solicitante, y que son tramitadas en su departamento de acuerdo a las declaraciones del secretario de Estado, [REDACTED], ante la prensa, el pasado día 23 de abril (1). Además, me gustaría saber qué reuniones fueron finalmente celebradas, con quién y cuándo. Por último, si fuera posible, me gustaría saber más sobre el motivo de cada reunión así como los temas tratados, los documentos compartidos o los acuerdos alcanzados.

2. Mediante Resolución de fecha 14 de junio de 2017, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó al interesado informándole de lo siguiente:

ctbg@consejodetransparencia.es



Toda la información relativa a las Agendas del Presidente y demás Ministros del Gobierno se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/agenda/>

Efectivamente, existe, desde el año 2012, una Agenda del Gobierno y del Presidente del Gobierno en la que se recogen los actos institucionales de cada uno de los miembros del Gobierno. Esta Agenda, que se viene publicando desde entonces en la página de la Moncloa, contiene actos de todo tipo: actos institucionales, reuniones y visitas que reciben los diferentes Ministros y el Presidente del Gobierno. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, "se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, sobre la base de tal concepto, debe señalarse que en el ámbito ministerial no hay más información pública que la recogida en la página web de la Moncloa, que hasta el momento es la única agenda que ha permanecido en el tiempo.

Respecto del resto de altos cargos conviene señalar que en España, a diferencia de otros países, no existe una regulación específica de la Agenda, en la que deberían incluirse los elementos y aspectos esenciales de la misma. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no regula la agenda de los altos cargos. En su texto no aparece citada la Agenda ni como categoría de información exigida ni como requisito explícito ni implícito de transparencia. Por ello no existe en el ámbito de este departamento una información que responda al concepto de información pública en esta materia, en los términos del artículo 13 ya citado. Y la obligada existencia de dicha información debería establecerse, en su caso, por una disposición legal, sin que de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o de otra norma pueda inferirse la existencia de una suerte de obligación implícita en este sentido.

Cabe señalar que, si se quisiera hacer un análisis de las reuniones mantenidas por los altos cargos del departamento consultando el registro de visitas del mismo, en relación a los datos que, en su caso, pudieran existir en los controles de seguridad, no debe olvidarse que, conforme a la Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios, los datos de carácter personal así obtenidos no podrán ser utilizados ni cedidos para otros fines distintos a la seguridad y control, y deberán ser destruidos cuando haya transcurrido el plazo de un mes, contado a partir del momento en que fueron recabados.

Por todo lo expuesto, se señala que no hay más información pública sobre Agendas del Gobierno, a los efectos del artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que la recogida en la página web de la Moncloa. Ello sin perjuicio de que, desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, se esté trabajando en



ampliar día a día las categorías de información que se muestran al ciudadano, categorías en las que las Agendas, no solo de los miembros del Gobierno, sino también de los altos cargos, deberían ocupar un lugar relevante, y así se está avanzando. Deberían ser incluidas, tan pronto como se regule la materia de la forma que corresponda.

3. El 16 de junio de 2017, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, escrito de Reclamación de presentado por [REDACTED], indicando que actuaba en *representación de la Fundación Ciudadana Civío*, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en el que manifestaba lo siguiente:

El ministerio ha registrado en el día de hoy (15/06/2017) una notificación del inicio de la tramitación, pero con fecha de 18/06/2017. Es decir, hasta hoy se desconocía la fecha de inicio de la tramitación. Se adjunta la notificación y el correo electrónico en el que se muestra la hora y fecha del aviso automático del Portal de Transparencia al correo referenciado en la solicitud.

Que unas horas después de esta notificación, el mismo 15/06/2017, se entregó la resolución denegatoria de la información. Su contenido es idéntico a otras solicitudes planteadas por la Fundación Civío que pedían una copia de las agendas de los altos cargos del Gobierno. Sin embargo, la respuesta a la solicitud 001-014898, copiada de otras resoluciones anteriores, no se ajusta a la solicitud puesto que no se pide la agenda del secretario de Estado de Seguridad, si no, las peticiones de reunión que recibe su departamento y que son tramitadas por personal del mismo, de acuerdo a una declaración del propio secretario de Estado, según una noticia de Europa Press publicada en El Mundo.

El 23 de abril de 2017, dicho diario publica en la noticia titulada El 'número dos' de Interior dará explicaciones en el Congreso por su reunión con el hermano de [REDACTED] lo siguiente:

Tras apuntar que desconoce el auto judicial en el que se hace referencia a "una posible reunión con un secretario de Estado", [REDACTED] ha detallado que él tuvo "una reunión el día 8 de marzo, a petición de [REDACTED], que llama al gabinete y pide simplemente una reunión para saludar", de modo que "esa reunión se celebra en la mañana del día 8, dura apenas 15 minutos y traslada su felicitación", según ha señalado.

Y unos párrafos más adelante:

Así, ha precisado que hay un criterio en la Secretaría de Estado, que "es la de tratar de atender todas las peticiones de reunión por un orden: en primer lugar, las peticiones que se realizan desde órganos del propio Ministerio del Interior; en segundo lugar, desde cualquier ámbito del Gobierno, y [REDACTED] era un alto directivo de una empresa pública, como Mercasa; en tercer lugar, sectores que



pueden tener relación con el Ministerio, como justicia, Fiscalía y empresas que puedan estar vinculadas con nuestro trabajo, y en cuarto lugar, cualquier persona que quiera saludarnos".

La solicitud de información, que se basa en estas declaraciones, versa sobre las peticiones de reunión recibidas por la Secretaría de Estado de Seguridad, que dispone de un criterio para su atención, así como del resultado de esta tramitación por parte del personal del departamento. Es decir, no pide la agenda del secretario de Estado. Puesto que son peticiones de reunión con un alto cargo del Gobierno y que su tramitación para su celebración o no se efectúa con recursos humanos del Estado, se trata de información de interés público.

Por todo ello, la resolución objeto de reclamación no se ajusta al objeto de la solicitud de información del expediente 001-014898.

SOLICITO:

Una resolución del Consejo de Transparencia al amparo del artículo 24 de la ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

4. El 21 de junio de 2017, este Consejo de Transparencia procedió a dar traslado de la Reclamación presentada al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que por dicho Departamento se realizaran las alegaciones consideradas oportunas.

Dichas alegaciones tuvieron entrada el 11 de julio y consistieron en las siguientes:

Antes de exponer las razones que ampararon la mencionada resolución de 14 de junio de 2017, por la que se concedía el acceso la información pública solicitada por el interesado, resulta procedente hacer las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- El reclamante dice actuar como representante de la "Fundación Ciudadana Civio, con CIF [REDACTED]". En este sentido, cabe señalar que el interesado realizó una solicitud de información, el 17 de mayo de 2017, a través del Portal de la Transparencia, a instancia personal. Sin embargo, mediante correo electrónico de 15 de junio de 2017, formula reclamación ante el CTBG, presentándose y actuando- ahora- en representación de la citada Fundación.

En este sentido, se tendría que valorar como cuestión previa, si el interesado que actúa ahora como representante de la citada Fundación tiene, en el presente caso, legitimación activa para reclamar, dado que la solicitud inicial de información fue presentada a título personal. Por otra parte, es preciso señalar que [REDACTED] no aporta ningún documento que acredite la representación de la Fundación de referencia.



Conviene tener presente que, si bien la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no exige acreditar un interés legítimo para ejercer el derecho de acceso a determinada información, no lo es menos que la reclamación regulada por dicha ley ante ese CTBG, como medio sustitutivo de los recursos administrativos, en los términos previstos por el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una vía impugnatoria que, como prevé este precepto, debe respetar los principios del procedimiento administrativo. En este sentido, debe tenerse en cuenta:

1º) Que ██████████ ██████████ formuló su solicitud de acceso sin que invocara estar actuando en calidad de representante de una entidad; es decir, que lo hacía a título personal.

2º) Que, sin embargo, al tiempo de presentar su reclamación (sustitutiva del recurso administrativo y no sustraída a los principios que rigen el procedimiento administrativo en nuestro ordenamiento) dice hacerlo en condición de representante de la Fundación Ciudadana Civio.

3º) En cualquier caso, contrariamente a lo exigido por el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no acredita la representación con la que actúa, siendo así que la representación, en el procedimiento administrativo (cualquier procedimiento administrativo) sólo se presume para la realización de actos de trámite, nunca tratándose de recursos o sus medios sustitutos, como son las reclamaciones.

En definitiva, este Ministerio considera que no se puede tener por reclamante a una persona jurídica, a la que el ██████████ dice representar sin acreditarlo, y que no es la misma que formuló la solicitud inicial. No se pretende con ello defender un rigorismo injustificado, pero tampoco llevar el antiformalismo en el procedimiento administrativo al punto de prescindir de la elemental exigencia de que solicitante y reclamante (o recurrente) y calidad con que actúan sean coincidentes.

SEGUNDA.- Es preciso señalar que el interesado remitió al CTBG la reclamación por correo electrónico, y que por lo tanto, no quedó acreditada la identidad del reclamante. Tampoco se señaló el lugar o medio de notificación en el que deseaba se le practicasen las comunicaciones, no cumpliendo con lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En este sentido, dicho artículo dispone que, entre otros requisitos, (aunque referidos a la solicitud son aplicables a las reclamaciones y recursos), "La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: a) La identidad del solicitante. b) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones".

También, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 66.1, dispone que "las solicitudes que se formulen deberán contener:





b) *Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.*

e) *Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio."*

En definitiva, distinto del medio y del lugar de notificación es la dirección de correo electrónico del solicitante que prevé el artículo 66.1.b) de la citada Ley, como mero contenido facultativo de la solicitud ("adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico", puesto que no sustituye ni puede suplir el preceptivo medio/lugar de notificación administrativa.

TERCERA.- Respecto al fondo de la reclamación ahora planteada, procede significar que los altos cargos de la SES reciben anualmente infinidad de solicitudes de reunión de muy distintos ámbitos: sociales, policiales, penitenciarios, técnicos, administrativos estatales, autonómicos, locales, europeos, internacionales, funcionariales, diplomáticos, institucionales, jurídicos, económicos, empresariales, sindicales, periodísticos, asociativos, políticos, deportivos, fundacionales, de organizaciones no gubernamentales, particulares, escolares, universitarios, etc.

Estas solicitudes de reunión se efectúan, de muy diversas maneras: verbalmente, por carta, por correo electrónico, telefónicamente, por el registro, por redes sociales,... y a muy diversos destinatarios: bien directamente al alto cargo, bien a algún miembro de su gabinete, bien mediante la secretaría correspondiente, bien genéricamente al Ministerio del Interior, al órgano competente...

De todas las solicitudes recibidas de alguno de los distintos modos, de las que no existe un registro donde se recojan las mismas, algunas de ellas se priorizan respecto a otras, otras se descartan, se posponen, se retrasan a un momento más adecuado o se adelantan en función de la importancia, la relevancia del momento y de la Agenda del alto cargo.

Respecto a las peticiones de reunión antes citadas, éstas se recogen y tramitan en notas, borradores, comunicaciones e informes internos, todas ellas de carácter auxiliar y de apoyo, que únicamente se validan cuando se incorporan a la Agenda del alto cargo. Es por ello que la información solicitada sería objeto de inadmisión conforme a lo establecido en el artículo 18 b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que señala lo siguiente:

"Artículo 18. Causas de inadmisión.



1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas."

No obstante, al interesado se le facilitó la información que, relativa a la Agenda se facilita desde este Ministerio, ya que de otro modo habría dado lugar a la inadmisión directa de la misma.

Asimismo, es preciso destacar que lo señalado anteriormente relativo a la inadmisión se aplicaría sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, relativo a la protección de los datos personales y del artículo 14 de la citada Ley, ya que determinadas reuniones y su trascendencia podría afectar a la seguridad nacional y pública al amparo de lo dispuesto en los apartados a) y d) entre otros, del mencionado artículo 14.

En definitiva, se considera que [REDACTED] tuvo acceso a la información que solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y que este Departamento actuó conforme a derecho.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas.



3. En primer lugar, deben atenderse las consideraciones de carácter formal alegadas por el MINISTERIO DEL INTERIOR y que son relativas a la legitimación activa de la Fundación Ciudadana Civio para presentar la reclamación.

Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, aportada en el escrito de reclamación, la solicitud de fecha 17 de mayo de 2017 fue presentada por [REDACTED]. En el justificante de presentación de la solicitud figura tanto el Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante, como la dirección de correo electrónico designada a efectos de notificaciones.

Por otro lado, la reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con fecha 15 de junio y entrada el día 16, indica expresamente los siguientes: [REDACTED], con DNI [REDACTED], en representación de la Fundación Ciudadana Civio, con CIF [REDACTED].

A este respecto, debe señalarse que el artículo 5- Representación- de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone lo siguiente:

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.

2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.

3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.

4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.





6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.

4. Por otro lado, el artículo 66- Solicitudes de iniciación- de la misma norma dispone que

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

d) Lugar y fecha.

e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.



Asimismo, según el artículo 112 de la Ley 39/2015

*1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, **podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición**, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.*

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado.

La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley.

(...)

Finalmente, debe recordarse que según el apartado 1 del art. 23 de la LTAIBG

1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Hay que tener en cuenta que la Ley 30/1992 ha sido sustituida por la mencionada Ley 39/2015 que en este punto se pronuncia en términos casi idénticos.

En el caso que nos ocupa y tal y como ha quedado descrito en los antecedentes de hecho, la reclamación no ha sido presentada por el interesado que presentó la solicitud ni por su representante. Ha sido más bien al revés: la persona física que realizó la solicitud de información- que debe entenderse realizada a título individual puesto que no indicaba que lo hacía actuando en representación de otra persona- es diferente de la persona jurídica que presenta la reclamación que, a su



vez, está representada en el procedimiento de recurso por la persona física que originalmente realizó la solicitud.

Por ello, cabe concluir que en el presente caso no existe legitimación para presentar reclamación, que corresponde al [REDACTED] y no a la Fundación CIVIO, razón por la cual debe inadmitirse.

III. RESOLUCIÓN

Considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **INADMITIR** la Reclamación presentada por [REDACTED], en representación de la Fundación Ciudadana Civio con fecha de entrada el 16 de junio de 2017 contra la Resolución de 14 de junio de 2017 del MINISTERIO DEL INTERIOR.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Fdo: Esther Arizmendi Gutiérrez

